



Asamblea General

Distr. general
2 de octubre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 49/2020, relativa a Fernando Aguirre-Urbina (Estados Unidos de América)* **

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 10 de enero de 2020 al Gobierno de los Estados Unidos de América una comunicación relativa a Fernando Aguirre-Urbina. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

* De conformidad con el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, José Antonio Guevara Bermúdez no participó en el examen del caso.

** Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Fernando Aguirre-Urbina, nacido en 1988, es nacional de México y ha vivido en los Estados Unidos de América desde que llegó al país cuando tenía 3 años. No habla bien el español y no tiene recuerdos de México ni vínculos con ese país. Creció en Washington, en un hogar de bajos ingresos, junto con siete hermanos, todos ellos ciudadanos de los Estados Unidos. Tiene tres hijos, también ciudadanos de los Estados Unidos, y está casado con una ciudadana de los Estados Unidos.

5. El Sr. Aguirre-Urbina terminó la enseñanza secundaria en 2007, pero perdió un concurso para la obtención de una beca universitaria por no estar resuelta su situación de residencia. Recibió el reconocimiento de su ciudad por su servicio a la comunidad, y también recibió un certificado de reconocimiento del programa de asociación de la comunidad de Yakima y la Universidad de Washington. Trabajaba empacando frutas y hortalizas en almacenes.

6. La fuente informa de que el Sr. Aguirre-Urbina padece trastornos de salud mental desde que tenía 6 años y no ha recibido una atención adecuada. Dos médicos distintos le diagnosticaron un trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos, y es probable que también padezca un trastorno esquizoafectivo. Sin embargo, nunca ha mostrado un comportamiento violento.

7. Según la fuente, el 12 de septiembre de 2009, el Sr. Aguirre-Urbina fue detenido por conducir sin licencia. Lo recluyeron en una cárcel del condado, pero no lo llevaron ante un juez. El 14 de septiembre de 2009, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo “encontró” en la cárcel y el Sr. Aguirre-Urbina fue puesto a disposición del Servicio y trasladado al Centro de Internamiento del Noroeste, en Tacoma (Washington). Un funcionario de inmigración recomendó prolongar la reclusión del Sr. Aguirre Urbina hasta que se celebrara una vista con arreglo al artículo 240 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aduciendo que apenas existían factores que pudieran respaldar su permanencia en el país y que había riesgo de fuga, e inició el procedimiento de expulsión. Todo esto tuvo lugar, al parecer, sin que mediara orden judicial y sin que se observaran las garantías procesales al privar de libertad al Sr. Aguirre-Urbina. El 18 de septiembre de 2009, el Sr. Aguirre-Urbina pagó una fianza de 5.000 dólares y fue puesto en libertad.

8. En enero de 2012, el Sr. Aguirre-Urbina fue detenido y acusado de posesión, entrega y tentativa de entrega de marihuana y metanfetaminas. El 31 de mayo de 2012, firmó un acuerdo por el que admitía su culpabilidad, poco después de haber sabido que el hijo que esperaba no sobreviviría al parto. No cabe suponer que comprendiera las implicaciones de la declaración o las repercusiones que esta tendría en la tramitación de su caso de inmigración. El abogado que lo representaba en la causa penal había sido informado de que se debía realizar un examen de salud mental, pero el Sr. Aguirre-Urbina se declaró culpable y aceptó una pena de un año y un día de prisión, de la que solo tendría que cumplir ocho meses por buena conducta. Sin embargo, a raíz de la sentencia condenatoria, se invalidó la fianza de 5.000 dólares aportada en el marco del caso de inmigración y el Sr. Aguirre-Urbina perdió el dinero. En septiembre de 2012, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas volvieron a “encontrarlo” en la cárcel y lo trasladaron al Centro de Internamiento del Noroeste sin mediar orden ni mandamiento judicial. El Sr. Aguirre-Urbina informó al Servicio sobre su estado de salud mental.

9. La fuente señala que, desde el momento en que el Sr. Aguirre-Urbina fue trasladado al Centro de Internamiento del Noroeste, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el juez de inmigración supieron que tenía problemas de salud mental y que no podía costearse los servicios de un abogado. Antes de ser condenado, el Sr. Aguirre-Urbina había contratado a un abogado para solicitar la residencia legal, pero este había abandonado el caso en dos ocasiones, alegando falta de comunicación debida al encarcelamiento prolongado, y había aconsejado al Sr. Aguirre-Urbina que buscara otro servicio de representación letrada.

10. El 11 de enero de 2013, después de que el Sr. Aguirre-Urbina compareciera ante el juez sin abogado, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una petición para que se tuviera en cuenta su historial médico y de salud mental, y solicitó que se celebrara una vista para evaluar su capacidad. El 5 de junio de 2013, el Departamento de Seguridad Nacional recomendó que el juez de inmigración asignara al Sr. Aguirre-Urbina un representante autorizado y que su caso se incorporase a la demanda colectiva *Franco-Gonzalez v. Holder*. En junio de 2013, un médico diagnosticó al Sr. Aguirre-Urbina un trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos intensos. El 9 de septiembre de 2013, el Sr. Aguirre-Urbina envió una carta para pedir una exención al juez de inmigración, pero el juez rechazó la petición y requirió que fuera su abogado quien presentara la solicitud. El juez continuó las actuaciones relativas al Sr. Aguirre-Urbina y rechazó las solicitudes del abogado de abandonar la representación.

11. El 14 de marzo de 2013, el Sr. Aguirre-Urbina presentó una solicitud de asilo, suspensión de la expulsión y protección al amparo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tenía motivos para temer que sería torturado y asesinado si lo expulsaban a México. Alegó, entre otras cosas, la existencia de amenazas creíbles concretas formuladas por miembros del cártel de Sinaloa. Además, los médicos habían indicado que, de ser expulsado, no recibiría la atención médica necesaria, por lo que quedaría expuesto a un riesgo de deterioro de su salud e, incluso, de suicidio. El Sr. Aguirre-Urbina también afirmó que correría peligro en México en razón de su orientación sexual.

12. El juez de inmigración celebró la primera vista sobre el fondo el 4 de marzo de 2014, sin respetar las debidas salvaguardias legales y sin advertir al Sr. Aguirre-Urbina que tenía derecho a asistencia letrada gratuita. El abogado que estaba intentando abandonar la representación finalmente asistió a una vista, en la que solicitó al juez de inmigración que primero examinara las cuestiones de la incapacidad y la salud mental, ya que no creía que la asistencia que prestaba al Sr. Aguirre-Urbina en calidad de abogado constituyese una salvaguardia suficiente, pero que no sabía qué otras opciones tenía este a su disposición.

13. El 9 de abril de 2014, el juez de inmigración rechazó la alegación de incapacidad del Sr. Aguirre-Urbina, denegó su solicitud de suspensión de la expulsión y ordenó su traslado a México, tras haber concluido que no había pruebas suficientes que respaldaran sus afirmaciones. El Sr. Aguirre-Urbina interpuso un recurso sin asistencia letrada. El 6 de julio de 2015, cuando el Sr. Aguirre-Urbina llevaba casi tres años recluso, la Junta de Apelaciones de Inmigración devolvió el caso al juez de inmigración por considerar que no se había analizado adecuadamente la cuestión de la capacidad. El Sr. Aguirre-Urbina contrató a otro abogado para solicitar que se archivaran las actuaciones. Dicha solicitud también se rechazó.

14. El 17 de enero de 2016, el juez de inmigración celebró una vista sobre la cuestión de la capacidad. Según se informa, otro médico diagnosticó al Sr. Aguirre-Urbina una depresión grave con síntomas psicóticos, así como ansiedad, detectó también una de las características diferenciales del trastorno esquizoafectivo e hizo hincapié en la necesidad de un tratamiento a largo plazo.

15. El 26 de junio de 2016, tras haberse emitido varios diagnósticos médicos, el juez de inmigración reconoció la falta de capacidad al Sr. Aguirre-Urbina, que llevaba ya casi cuatro años recluso. Sin embargo, las solicitudes de asilo, suspensión de la expulsión y protección fueron denegadas. El Sr. Aguirre-Urbina volvió a interponer un recurso *pro se*. La Junta de Apelaciones de Inmigración devolvió el caso para que se celebrara otra vista a fin de determinar si el Sr. Aguirre-Urbina podía actuar *pro se* en las actuaciones relativas al

recurso. El Sr. Aguirre-Urbina compareció sin abogado ante la Junta en otras dos vistas sobre su capacidad.

16. El 6 de septiembre de 2016, el juez de inmigración celebró otra vista sobre la cuestión de la capacidad, en la que el Sr. Aguirre-Urbina volvió a comparecer sin abogado. Cuando el juez le preguntó si comprendía sus derechos, el Sr. Aguirre-Urbina respondió: “No, en realidad no”. Describió sus problemas de salud mental, se refirió a la falta de tratamiento y dijo: “Y creo que no deberían poder recluir a alguien durante tanto tiempo. Ha sido muy duro, y debería ser ilegal”. En ese momento, el juez de inmigración ordenó que se le asignara un abogado de oficio.

17. En marzo de 2017, el Sr. Aguirre-Urbina volvió a recurrir ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, alegando falta de capacidad. El 8 de septiembre de 2017, el recurso fue desestimado y se indicó al Sr. Aguirre-Urbina que, si bien se reconocía su falta de capacidad, se habían garantizado las salvaguardias adecuadas mediante la presencia “continua” de un abogado y, por tanto, no se le había negado una vista elementalmente imparcial. En la resolución se afirmaba que el Sr. Aguirre-Urbina no había satisfecho la carga de la prueba respecto de su solicitud de protección porque no se había demostrado en modo alguno que el Gobierno de México le estuviera infligiendo sufrimiento de manera intencionada. El juez de inmigración ordenó la expulsión del Sr. Aguirre-Urbina.

18. El 18 de septiembre de 2017, el Sr. Aguirre-Urbina presentó *pro se* un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. El 28 de febrero de 2018, el Tribunal suspendió temporalmente la expulsión en espera de la resolución del recurso. Se asignó un abogado al Sr. Aguirre-Urbina. El 26 de marzo de 2019, el caso se devolvió a la Junta de Apelaciones de Inmigración para que realizara más investigaciones en relación con la solicitud de protección presentada al amparo de la Convención contra la Tortura.

19. La fuente sostiene que ha resultado sumamente difícil impugnar la privación de libertad y que se han requerido esfuerzos extraordinarios, algo que no cabe esperar de una persona enferma como el Sr. Aguirre-Urbina. Al parecer, ha necesitado seis equipos jurídicos diferentes para gestionar varios aspectos de su caso.

20. El Sr. Aguirre-Urbina fue privado de libertad de forma prolongada e indefinida. El juez de inmigración le denegó la libertad bajo fianza en al menos cuatro ocasiones, lo que demuestra un sesgo contra las personas, incluso no violentas, que han sido condenadas por infracciones relacionadas con las drogas. La fuente sostiene que las denegaciones no estaban debidamente respaldadas por pruebas de riesgo de fuga o indicios de algún peligro para la comunidad.

21. La fuente explica que los inmigrantes podían acceder a una vista para solicitar la libertad bajo fianza ante el juez de inmigración sobre la base del caso *Rodríguez*, con arreglo al cual se permitía solicitar una vista tras seis meses de reclusión, en espera de la resolución del procedimiento de expulsión. Por otro lado, sobre la base del caso *Casas-Castrillon*, la carga de la prueba se invierte y recae en el Gobierno, que tiene que demostrar que la persona no debe ser puesta en libertad por existir riesgo de fuga y/o de peligro para la comunidad. Sin embargo, cuando el Sr. Aguirre-Urbina tuvo acceso a las vistas, estas resultaron ineficaces. Además, recientemente los tribunales de los Estados Unidos derogaron el derecho a la concesión de vistas sobre la base del caso *Rodríguez*, y estas actuaciones son presididas por jueces de inmigración, las mismas autoridades administrativas que están defendiendo su propia decisión de expulsar. El único recurso disponible es el que cabe interponer ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que no es un órgano judicial y está compuesta por antiguos jueces de inmigración. La fuente afirma que esto no puede considerarse una revisión judicial imparcial.

22. El 12 de septiembre de 2013, cuando el Sr. Aguirre-Urbina llevaba más de un año recluso, se le concedió una vista para solicitar la libertad bajo fianza. Lo representó un abogado diferente, al que no conocía. Se denegó la solicitud, ya que se consideró que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un peligro y que había riesgo de fuga. Sin embargo, el juez no aportó ningún razonamiento, prueba o motivo para respaldar esas conclusiones.

23. El 30 de diciembre de 2014, tras más de dos años de reclusión, el Sr. Aguirre-Urbina pidió, a través de otro abogado, una segunda vista para solicitar la libertad bajo fianza sobre la base del caso *Rodriguez*. Se le concedió la vista y, una vez más, el mismo juez de inmigración denegó su solicitud. Sin embargo, entonces, el Sr. Aguirre-Urbina había sido sometido ya a dos exámenes de salud mental realizados por dos médicos distintos y se habían establecido la gravedad de su enfermedad y su falta de capacidad.

24. La fuente informa de que, durante esa vista, el Departamento de Seguridad Nacional describió erróneamente al Sr. Aguirre-Urbina como un peligroso “traficante de drogas armado”. La fuente subraya que nunca se formularon acusaciones de delitos relacionados con las armas. Pese a ello, basándose en las condenas penales de 2012, el juez de inmigración volvió a concluir que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un peligro para la comunidad y que había riesgo de fuga.

25. El Sr. Aguirre-Urbina no recurrió, pero se le concedió otra vista sobre la base del caso *Rodriguez*, programada para el 11 de febrero de 2016. Sin embargo, como no podía pagar a su abogado, se retiró la solicitud de vista.

26. El 24 de agosto de 2016, el Sr. Aguirre-Urbina compareció para la tercera vista concedida sobre la base del caso *Rodriguez*, pero esta se aplazó hasta el 8 de noviembre de 2016. Una vez más, se determinó, a la luz de su condena penal de 2012, que representaba un peligro para la comunidad y que había riesgo de fuga. No se proporcionó ninguna explicación al respecto.

27. El Sr. Aguirre-Urbina interpuso un recurso contra la denegación de la libertad bajo fianza ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que admitió la objeción y devolvió el caso para que se estudiara si el Departamento de Seguridad Nacional había satisfecho la carga de la prueba. El 7 de junio de 2017, el juez de inmigración determinó que el Departamento de Seguridad Nacional no había cumplido su obligación de demostrar la existencia de riesgo de fuga, pero concluyó, basándose en la condena penal de 2012, que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un peligro para la comunidad.

28. Entonces, el Sr. Aguirre-Urbina solicitó una vista invocando el caso *Casas-Castrillon*, pero, el 15 de marzo de 2018, la jueza de inmigración denegó la solicitud, al considerar que las vistas basadas en el caso *Casas-Castrillon* y las basadas en el caso *Rodriguez* se regían por los mismos criterios y que ya se habían concedido vistas *Rodriguez* al Sr. Aguirre-Urbina. La jueza de inmigración también concluyó que ya no tenía competencia para celebrar vistas sobre la base del caso *Rodriguez* debido a una decisión del Tribunal Supremo. El 14 de noviembre de 2018, la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó el recurso del Sr. Aguirre-Urbina.

29. La fuente sostiene que el Sr. Aguirre-Urbina no puede regularizar su situación debido a sus antecedentes penales. Tras haberse declarado culpable, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo del estado de Washington para pedir que se revocara la sentencia, aduciendo falta de capacidad. El 5 de septiembre de 2013, el Sr. Aguirre-Urbina solicitó una revisión por otro tribunal del estado alegando que la declaración de culpabilidad no se había formulado de manera deliberada, racional y voluntaria y que su abogado no le había prestado una asistencia efectiva. Sin embargo, la solicitud se desestimó por haber vencido el plazo para su presentación.

30. El 9 de noviembre de 2016, el Sr. Aguirre-Urbina solicitó un procedimiento de *habeas corpus* para impugnar su condena penal ante el Tribunal del Distrito Occidental, argumentando que su declaración no se había formulado de manera deliberada, racional y voluntaria. No se le concedió una vista y, el 15 de mayo de 2017, el tribunal de distrito rechazó la solicitud de *habeas corpus* por falta de competencia.

31. El 4 de diciembre de 2018, un abogado voluntario solicitó un procedimiento de *habeas corpus* para impugnar la reclusión prolongada del Sr. Aguirre-Urbina. Según se informa, el 20 de marzo de 2019, el juez federal adjunto del tribunal de distrito recomendó que se rechazara la solicitud y se accediera a la petición presentada por el Gobierno en ese sentido.

32. El 5 de abril de 2019, el Sr. Aguirre-Urbina sostuvo que el Gobierno no había podido demostrar con pruebas claras y convincentes que representara un peligro para la comunidad y que, por tanto, su reclusión se había prolongado injustificadamente de manera indefinida.

33. El 17 de mayo de 2019, el juez de distrito rechazó la recomendación del juez federal adjunto y ordenó que el juez de inmigración justificara, en un plazo de 14 días, por qué el tribunal no debía acceder a poner en libertad, bajo las condiciones pertinentes, al Sr. Aguirre-Urbina, a menos que, en una nueva vista sobre la libertad bajo fianza que se celebrase dentro de ese plazo, el Gobierno presentara pruebas claras y convincentes de que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un peligro. El tribunal devolvió el caso al juez de inmigración, que había mostrado en reiteradas ocasiones su reticencia a conceder la libertad al Sr. Aguirre-Urbina.

34. El 28 de mayo de 2019, siguiendo la orden del tribunal de distrito, el juez de inmigración celebró una vista sobre la libertad bajo fianza, durante la cual se mostró importunado por tener que revisar la privación de libertad del Sr. Aguirre-Urbina. Al parecer, el juez señaló que estaba obligado a fijar una fianza pese a la gravedad de la condena, y estableció la suma extremadamente elevada de 30.000 dólares, sin tener en cuenta la capacidad de pago del Sr. Aguirre-Urbina. El Sr. Aguirre-Urbina, sus familiares y otros miembros de la comunidad unieron fuerzas para recaudar la suma de la fianza. El 11 de junio de 2019, el Sr. Aguirre-Urbina fue puesto en libertad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

35. La fuente afirma que al Sr. Aguirre-Urbina, que fue detenido en 2009 y condenado en 2012, se le negó una revisión judicial plena de la legalidad de su reclusión. Desde 2012, se le había negado una alternativa a la privación de libertad y, cuando logró que le concedieran la libertad bajo fianza, como represalia se fijó una suma que resultaba excesivamente elevada, habida cuenta de que durante los seis años anteriores no había trabajado por más de un dólar al día y de que su familia disponía de pocos medios. El juez de inmigración tampoco previó ninguna salvaguardia en relación con el deterioro de su salud.

36. La fuente afirma también que el Centro de Internamiento del Noroeste es una cárcel que alberga a casi 1.600 inmigrantes y que está gestionada por The GEO Group, una empresa privada contratada al efecto. Durante su reclusión en ese centro, al Sr. Aguirre-Urbina no se le permitió pasar suficiente tiempo al aire libre; se le negó el acceso a programas educativos y de trabajo; no se le proporcionaron alimentos nutritivos ni acceso a una dieta adecuada; no se le ofrecieron una atención ni un tratamiento adecuados de la salud física y mental; no se le permitió comunicarse con sus familiares más cercanos; y no se le proporcionó acceso a mecanismos de denuncia.

37. Según se informa, cuando el Sr. Aguirre-Urbina llegó al Centro de Internamiento del Noroeste, se le asignó la categoría de “peligroso” y se le entregó un uniforme rojo. La asignación de esa categoría repercute en los derechos concedidos a los internos, en particular en los derechos a circular libremente, a trabajar en determinadas ocupaciones y a disfrutar de visitas y de tiempo al aire libre. El Sr. Aguirre-Urbina pasó tres años sin poder salir al patio y vestía el uniforme que llevan los delincuentes cuando compareció ante un juez de inmigración. Fue recluso en régimen de aislamiento en varias ocasiones, lo que afectó gravemente a su salud física y mental.

38. El Sr. Aguirre-Urbina trabajó en el “programa de voluntariado” gestionado por The GEO Group. Al parecer, los internos reciben una remuneración de solo un dólar por día de trabajo y, pese a las múltiples denuncias, el Gobierno nunca ha exigido a la empresa que pague salarios justos. El 6 de agosto de 2018, el Sr. Aguirre-Urbina fue nombrado representante para las actuaciones relativas a una demanda colectiva presentada contra The GEO Group por utilizar a migrantes privados de libertad para realizar trabajos mal remunerados. En la demanda se instaba a los tribunales a que concluyeran que The GEO Group estaba vulnerando la Ley de Salario Mínimo del estado de Washington. Al avanzar la tramitación de la demanda colectiva con el Sr. Aguirre-Urbina a la cabeza, este quedó en una posición vulnerable y fue objeto de presión y represalias por parte de The GEO Group y funcionarios gubernamentales.

39. El Sr. Aguirre-Urbina ha sufrido represalias por denunciar injusticias. Como consecuencia de sus quejas contra The GEO Group y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, fue trasladado sin previo aviso de un centro de reclusión a otro en al menos dos ocasiones: primero, al Centro de Internamiento de Mesa Verde, en Bakersfield (California), y, después, al Centro Correccional Regional del Norte de Oregón.

i. Categoría I

40. Según la fuente, la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina en el Centro de Internamiento del Noroeste ha sido una prolongación de su anterior reclusión en el contexto de la justicia penal. Además, ha sido de carácter obligatorio y punitivo. El Sr. Aguirre-Urbina fue recluido arbitrariamente sin posibilidad efectiva de impugnar su privación de libertad, lo que constituyó una vulneración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.

41. La libertad personal y los derechos humanos del Sr. Aguirre-Urbina se vieron mermados a raíz de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo “encontrara” en la cárcel. La fuente afirma que el “encontrar” a una persona no equivale a detenerla por orden judicial o retenerla temporalmente por solicitud oficial, por lo que se actuó fuera de la constitucionalidad. En 2009, el Sr. Aguirre-Urbina fue detenido por un agente de tráfico y fue encarcelado, sin mediar orden judicial ni notificación de acusaciones penales. No fue llevado inmediatamente ante un juez para que revisara la legalidad de la privación de libertad. Además, cuando estaba en la cárcel, un funcionario de inmigración lo “encontró” y lo trasladó a un centro de internamiento, en lo que constituyó un acto de colaboración improcedente con las fuerzas del orden por medio del Programa de Búsqueda de Delincuentes Extranjeros, un marco discriminatorio que permite a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas buscar inmigrantes en las cárceles de manera aleatoria. A raíz de ello, el Sr. Aguirre-Urbina permaneció cuatro días recluido arbitrariamente en el Centro de Internamiento del Noroeste, tuvo que pagar una suma de 5.000 dólares para obtener la libertad bajo fianza y se enfrentó a un procedimiento de expulsión que se inició sin que se le asignara un abogado.

42. La condena por delitos de drogas dictada contra el Sr. Aguirre-Urbina en 2012 tras su declaración de culpabilidad fue arbitraria, ya que el Sr. Aguirre-Urbina tenía problemas de adicción a las drogas y al alcohol y padecía una enfermedad mental, por lo que es cuestionable que comprendiera sus derechos y la declaración que formuló. El Sr. Aguirre-Urbina no pudo impugnar la condena, ya que fue transferido a un centro de internamiento de inmigrantes. Sus detenciones y los episodios discriminatorios en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo “encontró” en la cárcel tuvieron la gravísima consecuencia de privarlo de su derecho a permanecer en los Estados Unidos, con lo que se penalizó su condición de inmigrante. La fuente subraya que toda detención administrativa, en particular la de migrantes en situación irregular, debe ser una medida de último recurso y ha de ser necesaria, proporcionada y de carácter no punitivo. Siempre que sea posible, deben buscarse alternativas a la privación de libertad. La fuente sostiene que es sabido que los Estados Unidos recurren sistemáticamente a la reclusión arbitraria y prolongada de migrantes. Se alega, pues, que la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina por motivos de inmigración se inscribe en la categoría I de la detención arbitraria, ya que fue de carácter obligatorio y punitivo, no estuvo limitada por ley, fue prolongada e indefinida y se impuso sin que se estudiara la aplicación de medidas alternativas no privativas de libertad.

43. La reclusión del Sr. Aguirre-Urbina fue de carácter obligatorio. La fuente informa de que los Estados Unidos han intentado justificar el internamiento inmediato de los migrantes invocando el artículo 1226 del título 8 del Código de los Estados Unidos. El artículo 1226 a) otorga al Departamento de Seguridad Nacional facultad discrecional para determinar si un no ciudadano debe permanecer recluido o debe ser puesto en libertad bajo fianza o en libertad condicional en espera de que concluya el procedimiento de expulsión, a menos que el no ciudadano haya cometido alguna de las infracciones señaladas en el artículo 1226 c), en cuyo caso la reclusión es obligatoria. El Sr. Aguirre-Urbina permaneció recluido en el Centro de Internamiento del Noroeste tras haber cumplido su condena. Sus solicitudes de libertad bajo fianza fueron rechazadas cuatro veces por el mismo juez

administrativo, que no aportó pruebas claras y convincentes ni justificó que el Sr. Aguirre-Urbina planteara un peligro para la sociedad o que hubiera riesgo de fuga.

44. La reclusión del Sr. Aguirre-Urbina también revistió carácter punitivo. El encarcelamiento masivo de migrantes va en contra de las normas internacionales de derechos humanos sobre la detención arbitraria. Al parecer, el Centro de Internamiento del Noroeste es una cárcel, que forma parte de un vasto sistema de internamiento civil y alberga a casi 1.600 migrantes. Todos los migrantes privados de libertad deben ser reclusos en condiciones dignas y tratados con respeto. Sin embargo, el Sr. Aguirre-Urbina soportó unas condiciones de reclusión inhumanas que agravaron el carácter arbitrario de su privación de libertad. El Centro de Internamiento del Noroeste está gestionado por una empresa privada, es decir, una entidad con fines de lucro, sobre la cual el Gobierno no ejerce una supervisión adecuada, y existen conflictos de intereses.

45. La fuente sostiene además que se plantean varios problemas en relación con la duración de la reclusión. En primer lugar, no existe un período máximo establecido por ley o por los tribunales para la detención administrativa de migrantes. Durante una vista, al parecer, el Sr. Aguirre-Urbina preguntó al juez: “¿Sabe cuánto tiempo más tendré que estar aquí? Es que, bueno, me estoy empezando a deprimir y se me está haciendo bastante duro”. No recibió respuesta y permaneció recluso.

46. En segundo lugar, la duración de la reclusión superó los seis años, lo que le confirió carácter prolongado y arbitrario y entrañó una contravención del principio de proporcionalidad, especialmente si se tiene en cuenta que el procedimiento se prolongó durante un período indeterminado. La fuente recuerda que el Grupo de Trabajo, en el informe sobre su visita a los Estados Unidos, afirmó que los inmigrantes que trataban activamente de ser exonerados de la expulsión (por ejemplo, presentando repetidamente solicitudes de asilo) se enfrentaban, al parecer, a períodos de internamiento sustancialmente más largos que los que aceptaban la posibilidad de la expulsión¹.

47. En tercer lugar, la reclusión fue indefinida, ya que no se fijó ningún límite máximo permisible para su duración. Según el Gobierno, la cuestión no tenía que ver con si se había fijado una fecha de fin de la reclusión, sino con si era posible expulsar al Sr. Aguirre-Urbina y cuándo. Al parecer, el Gobierno adujo que el Sr. Aguirre-Urbina sería “expulsado rápidamente” en un “futuro razonable [sic] previsible”, lo que justificaba que permaneciera recluso como medida de carácter temporal. Sin embargo, estuvo encarcelado más de seis años, hasta que se atendió a parte de las reclamaciones que formuló al amparo de la Convención contra la Tortura y se suspendió la expulsión. Tal forma de proceder no puede considerarse conforme con el requisito de la pronta expulsión y contraviene la Constitución, que exige que la privación de libertad sea restringida y no indefinida².

48. El derecho interno permite la libertad condicional y la libertad bajo fianza como alternativas a la privación de libertad. Sin embargo, la fuente informa de que, en la práctica, esas medidas se deniegan sistemáticamente, se conceden con condiciones que vuelven inviable o extremadamente costosa la puesta en libertad (como la fijación de una fianza excesiva o la no asignación de abogado) o se excluyen mediante la jurisprudencia.

49. El Sr. Aguirre-Urbina tuvo una serie de vistas infructuosas sobre la libertad bajo fianza, que prolongaron su reclusión por acusaciones falsas de peligrosidad y riesgo de fuga. Las decisiones no se justificaron mediante explicaciones ni pruebas claras y convincentes. El único fundamento que respaldó la conclusión de que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un peligro para la sociedad fue una sentencia condenatoria anterior.

50. En la recomendación de que se desestimara su petición de un procedimiento de *habeas corpus*, el juez describió su peligrosidad afirmando que correspondería imponerle la pena máxima prevista para el delito, es decir, 12 años. Sin embargo, el Sr. Aguirre-Urbina demostró que no representaba un peligro mediante el comportamiento exhibido durante la privación de libertad, por ejemplo participando en el programa de trabajo durante muchos años. Le cambiaron el uniforme rojo (asignado a los autores de los delitos más graves, que

¹ A/HRC/36/37/Add.2.

² Tribunal Supremo de los Estados Unidos, *Zadvydas v. Davis*, 533 U.S. 678, 690 (2001).

no pueden trabajar) por el naranja (asignado a los autores de delitos de gravedad media, que sí pueden trabajar). No obstante, el juez solo tuvo en cuenta la sentencia condenatoria previa, dictada por un delito no violento, pese a que la ley requería la consideración de toda una serie de factores.

51. Anteriormente, los migrantes reclusos de manera prolongada tenían derecho a que se les concediera una vista cada seis meses para solicitar la libertad bajo fianza. Ese derecho fue revocado por los tribunales, que decidieron que solo los residentes legales permanentes podían beneficiarse de tales vistas, en contravención del principio de no discriminación e igual protección de la ley.

ii. Categoría II

52. La fuente subraya que solicitar asilo o tratar de permanecer en un país no es un delito, sino un derecho humano, enunciado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 7 respalda esta afirmación garantizando la igualdad ante la ley, que también se reconoce en el artículo 26 del Pacto.

53. El Sr. Aguirre-Urbina había vivido como indocumentado en los Estados Unidos desde los 3 años, clandestinamente, sin ninguna protección especial. Tras ser detenido en 2009, había estado tratando de regularizar su situación, sin medios para procurarse representación letrada. En 2012, cuando se encontraba recluso, presentó una solicitud de asilo, suspensión de la expulsión y protección al amparo de la Convención contra la Tortura. Su solicitud se basa en las amenazas específicas y continuas del cártel de Sinaloa y en su necesidad de atención de la salud mental.

54. Además, la fuente afirma que, a la luz de la jurisprudencia nacional, la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina supera el período habitual de privación de libertad de los solicitantes de asilo, que, según el Tribunal Supremo, es de entre seis meses y un año. El Sr. Aguirre-Urbina permaneció recluso durante más de seis años. Se alega, pues, que la privación de libertad indefinida de que fue objeto por su situación migratoria se inscribe en la categoría II de la detención arbitraria, dado que se vulneraron derechos sustantivos.

iii. Categoría III

55. La fuente sostiene que la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina se inscribe en la categoría III de la detención arbitraria porque las autoridades no respetaron las garantías mínimas internacionales del debido proceso previstas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

56. La primera detención del Sr. Aguirre-Urbina, relacionada con una infracción de tráfico y practicada sin mediar orden judicial, fue, según se alega, arbitraria, como también lo fueron el episodio en que un funcionario de inmigración lo “encontró” y lo trasladó al Centro de Internamiento del Noroeste en 2009; el acuerdo por el que se declaró culpable en 2012, estando en condiciones de incapacidad mental; la falta sustantiva de revisión judicial; y la criminalización de que fue objeto.

57. El hecho de ser migrante indocumentado no es una cuestión de derecho penal y, por tanto, no cabe imponer una sanción penal, y menos aún si se trata de una privación de libertad indefinida. En el presente caso concurrieron, al parecer, las características sistémicas del internamiento de inmigrantes —como la reclusión prolongada por la existencia de antecedentes penales y la fijación de fianzas excesivas y desproporcionadamente elevadas—, que justifican en sí mismas la adscripción de la privación de libertad a la categoría III de la detención arbitraria.

58. La fuente subraya que los Gobiernos deben garantizar el derecho de los migrantes privados de libertad a recibir un asesoramiento jurídico gratuito y efectivo inmediatamente después de la detención. Según se informa, en los casos de inmigración, por ser estos de naturaleza civil, no se contempla el derecho a la asistencia letrada gratuita, sin tener en cuenta las graves consecuencias que ello conlleva. El Sr. Aguirre-Urbina no tuvo acceso a representación letrada efectiva y gratuita inmediatamente después de pasar a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ni en la primera ocasión, en 2009, tras

haber sido detenido por una infracción de tráfico, ni en la segunda, en 2012, tras haber cumplido su condena. Sus posibilidades de defenderse también se vieron afectadas por sus traslados a diferentes lugares de reclusión.

59. Además, el juez de inmigración no tuvo en cuenta que el Sr. Aguirre-Urbina tenía derecho a un abogado de oficio en razón de su enfermedad mental. Aunque el Servicio de Inmigración y Aduanas y el juez de inmigración eran conscientes de que lo asistía ese derecho, permitieron que el procedimiento siguiera adelante, pese a haber constatado que el Sr. Aguirre-Urbina tenía dificultades para encontrar abogados, pagarles y mantenerlos contratados. En una vista sobre el fondo de su caso de inmigración, el juez rechazó la petición de abandono de un abogado, que solicitó retirarse de la representación alegando que el Sr. Aguirre-Urbina tenía “problemas económicos” y que afirmó además que no había tenido con él una relación cliente-abogado durante bastante tiempo y que no creía ser la persona adecuada para representarlo.

60. Dos médicos distintos diagnosticaron al Sr. Aguirre-Urbina una enfermedad mental grave, por lo que debía considerarse que carecía de capacidad para participar en actuaciones judiciales. El Departamento de Seguridad Nacional se había mostrado preocupado por la cuestión de su capacidad desde enero de 2013. Por tanto, la falta de asistencia letrada gratuita y efectiva, demuestra, según se alega, que no se respetaron las garantías procesales.

61. La fuente afirma que el Sr. Aguirre-Urbina no pudo impugnar la legalidad de los episodios en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo “encontró” en la cárcel. Durante su reclusión, solo pudo acceder a medidas alternativas a la privación de libertad a través de fianzas. Desde 2012, el juez de inmigración concluyó reiteradamente, sin pruebas, que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un peligro para la sociedad. El juez se opuso a revisar las “detenciones” practicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los consiguientes traslados a centros de internamiento. Al parecer, se negó al Sr. Aguirre-Urbina el derecho a comparecer ante un tribunal competente, independiente e imparcial, con arreglo a las garantías procesales. El Sr. Aguirre-Urbina solicitó una vista ante un tribunal de inmigración. Sin embargo, dichos tribunales pertenecen y sirven al poder ejecutivo federal, el responsable de su privación de libertad. Desde 2018, después de que la jueza de inmigración afirmase no tener competencia para ponerlo en libertad, intentó que su reclusión prolongada se sometiera a la revisión de un tribunal de distrito. Aunque el juez del tribunal de distrito atendió parcialmente a la petición de un procedimiento de *habeas corpus*, esto se tradujo en la celebración de otra vista sobre la libertad bajo fianza por el mismo juez. No se revisó la legalidad de la reclusión inicial ni el daño causado por los años de privación de libertad. El Sr. Aguirre-Urbina no pudo impugnar la legalidad de su reclusión ante un órgano independiente e imparcial.

62. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y la Octava Enmienda de la Constitución prohíben recluir a una persona en condiciones que equivalgan a un castigo, tanto en los procesos penales como en los civiles. Según la fuente, la falta de atención de la salud mental durante la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina agravó su enfermedad y, por tanto, entrañó una vulneración de esas disposiciones.

63. Según se alega, la total falta de atención a la salud mental del Sr. Aguirre-Urbina durante las actuaciones penales lo llevó a suscribir una declaración que no comprendía plenamente. El modo en que los tribunales abordaron su falta de capacidad también entrañó una vulneración de su derecho a un juicio imparcial. Fue examinado por dos médicos y ambos concluyeron que requería tratamiento psicoterapéutico hospitalario y ambulatorio a largo plazo. Sin embargo, se le siguió denegando la atención adecuada, a raíz de lo cual padeció una depresión grave con síntomas psicóticos durante años. Esa falta de atención no solo lo incapacitó para participar de manera efectiva en las actuaciones, sino que también le causó un intenso sufrimiento durante la reclusión. La excesiva duración de la reclusión y la flagrante falta de atención a su estado de salud tenían por fin presionarlo para que renunciara a su derecho a recurrir contra la expulsión.

64. La fuente alega que Sr. Aguirre-Urbina fue tratado como un delincuente por su condición de indocumentado cuando lo paró un agente de tráfico y en las dos ocasiones en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo “encontró” en la cárcel, y también

cuando su condena penal sirvió de base para recluirlo en el marco del procedimiento de inmigración. No había ninguna prueba clara y convincente de peligrosidad o de riesgo de fuga que justificara la reclusión prolongada.

65. El juez de inmigración no consideró debidamente el factor del paso del tiempo en relación con los antecedentes penales y fundamentó su decisión exclusivamente en la condena penal, sin tener en cuenta que los delitos no habían sido violentos, que se habían cometido más de seis años atrás y que el Sr. Aguirre-Urbina se encontraba en un estado mental frágil cuando había aceptado el acuerdo por el que se había declarado culpable.

66. La fuente informa de que la cláusula relativa a las debidas garantías procesales que figura en la Quinta Enmienda de la Constitución permite la reclusión únicamente con fines restringidos y limitados. La reclusión civil también vulnera dicha cláusula, salvo cuando se dan ciertas circunstancias especiales y restringidas y la medida no reviste carácter punitivo. Estas garantías procesales aseguran que la reclusión sirva únicamente para evitar la fuga y el peligro para la comunidad. El juez no puede basarse únicamente en las condenas penales previas para denegar la libertad bajo fianza, sino que debe demostrar con pruebas claras y convincentes que la persona representa un peligro para la comunidad.

67. La duración de la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina es, según se afirma, la prueba más clara de que se vulneró su derecho a las garantías del debido proceso, concretamente su derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad. Su reclusión indefinida no fue una medida proporcional ni razonable. El Sr. Aguirre-Urbina no sabía cuándo lo pondrían en libertad, por lo que se trató de una reclusión indefinida.

iv. Categoría IV

68. La fuente afirma que los tribunales han venido debilitando el sistema de vistas y fianzas por medio de la jurisprudencia. Anteriormente, un migrante que llevara mucho tiempo recluido tenía derecho a una vista para solicitar la libertad bajo fianza cada seis meses. Sin embargo, en marzo de 2019, el Tribunal Supremo dictaminó, al parecer, que los inmigrantes que habían sido condenados por determinados delitos, y que ya habían cumplido su condena, podían ser recluidos de manera indefinida sin derecho a una vista sobre la libertad bajo fianza, independientemente de que el Departamento de Seguridad Interior los hubiera recluido por motivos de inmigración inmediatamente después de su puesta en libertad tras el cumplimiento de la sanción penal. Esto representa un encarcelamiento obligatorio durante la tramitación del expediente de expulsión en el sistema de tribunales de inmigración, sin una vista previa para determinar si la reclusión es necesaria³.

69. El Tribunal Supremo afirmó que la ley no preveía el derecho de los migrantes recluidos a las vistas periódicas sobre la libertad bajo fianza. Dictaminó asimismo que no había ninguna disposición que limitara la duración del internamiento de inmigrantes. Según se alega, al eliminar la posibilidad de un recurso efectivo, la jurisprudencia ha creado una vulneración automática correspondiente a la categoría IV.

v. Categoría V

70. Las detenciones y reclusiones del Sr. Aguirre-Urbina entrañaron presuntamente discriminación por su condición de indocumentado, su origen étnico hispano, su situación económica, su discapacidad mental y su orientación sexual. La obligación de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos de las personas, enunciada en los artículos 2 y 26 del Pacto, es aplicable respecto de todas las personas que se encuentran en el territorio de un Estado.

71. La fuente afirma que al Sr. Aguirre-Urbina no se le concedieron las garantías de la libertad personal de que gozan los ciudadanos estadounidenses, los residentes legales permanentes y las personas enjuiciadas. La Octava Enmienda no se aplica al caso del internamiento de inmigrantes.

³ American Civil Liberties Union, *Nielsen v. Preap*, resumen del caso. Disponible en www.aclu.org/cases/nielsen-v-preap.

72. La reclusión del Sr. Aguirre-Urbina entrañó discriminación por su situación económica y migratoria. El Gobierno y The GEO Group discriminaron al Sr. Aguirre-Urbina al fijar una remuneración desproporcionadamente baja. Aunque el Sr. Aguirre-Urbina hubiera trabajado todos los días del año, solo habría ganado 365 dólares, una suma que únicamente le habría permitido costearse una o dos horas de servicios de un abogado, sin tener en cuenta otros gastos. Además, el Sr. Aguirre-Urbina ha sido migrante indocumentado desde una edad muy temprana, pues llegó a los Estados Unidos siendo un niño. Se le han negado oportunidades de movilidad social y económica a lo largo de su vida, por ejemplo la de recibir una beca. Esta situación se ha agravado aún más durante la reclusión.

73. El Sr. Aguirre-Urbina ha sido discriminado por su discapacidad mental, ya que no pudo contar con una representación adecuada en varias actuaciones. Durante mucho tiempo se le negó el derecho a un abogado, y el tribunal no tuvo en cuenta su enfermedad mental ni tomó medidas para que recibiera tratamiento. Su tribunal le asignó un abogado para las actuaciones relativas al recurso interpuesto ante Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en 2018, más de dos años después de que se hubiera reconocido su incapacidad y seis años después de que el Gobierno hubiera solicitado protección. Compareció sin abogado ante el juez de inmigración en al menos tres ocasiones.

74. Por último, la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina entrañó discriminación por su orientación sexual. El Sr. Aguirre-Urbina se considera bisexual y esta identidad no se tuvo en cuenta durante las actuaciones al evaluar el riesgo que correría si fuera expulsado a México. Se alega, pues que su reclusión se inscribe en la categoría V de la detención arbitraria.

Respuesta del Gobierno

75. El 10 de enero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Solicitó al Gobierno que, a más tardar el 10 de marzo de 2020, presentara información detallada actualizada sobre la situación del Sr. Aguirre-Urbina y aclarara las disposiciones legales en virtud de las cuales seguía privado de libertad, así como la compatibilidad de la reclusión con las obligaciones que incumbían al Gobierno en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que velara por la integridad física y mental del Sr. Aguirre-Urbina.

76. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta del Gobierno a esa comunicación. El Gobierno no solicitó una prórroga del plazo para presentar su respuesta, posibilidad prevista en los métodos de trabajo del Grupo. Hace ya algún tiempo que el Gobierno no proporciona respuestas sustantivas a las comunicaciones del Grupo de Trabajo⁴. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que colabore constructivamente con él en el examen de todas las denuncias de privación arbitraria de libertad.

Deliberaciones

77. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

78. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

79. A modo de aclaración preliminar, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Aguirre-Urbina fue puesto en libertad bajo fianza el 11 de junio de 2019 y que actualmente no se encuentra recluso. Sin embargo, el Grupo de Trabajo considera que en

⁴ Opiniones núm. 72/2017, núm. 70/2019 y núm. 85/2019.

el presente caso se plantea una cuestión importante en relación con los diferentes períodos de reclusión y, por tanto, procede a examinar la comunicación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo.

i. Categoría I

80. La fuente sostiene que la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina se inscribe en la categoría I, ya que fue detenido el 12 de septiembre de 2009 sin que mediara orden judicial, no fue llevado ante un juez y, a continuación, el 14 de septiembre de 2009, fue recluido en un centro de internamiento de inmigrantes. Alega además que la sentencia condenatoria de 2012 y la consiguiente pena de prisión fueron arbitrarias, ya que el Sr. Aguirre-Urbina se declaró culpable sin comprender plenamente las consecuencias que ello tendría. Por último, la fuente afirma que también fue arbitrario el segundo episodio de traslado a un centro de internamiento de inmigrantes, que se produjo en septiembre de 2012, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas “encontrara” al Sr. Aguirre-Urbina.

81. En el presente caso hay dos series de actuaciones principales: por un lado, las relativas a la necesidad de mantener recluido al Sr. Aguirre-Urbina y a las solicitudes de libertad bajo fianza y, por otro, las relativas al fondo de la solicitud de asilo. Las primeras guardan relación directa con la privación de libertad continuada y, por ende, se inscriben en el ámbito de competencia del Grupo de Trabajo. Las segundas, referentes a la solicitud de asilo, no entran dentro del ámbito de competencia del Grupo de Trabajo⁵, que remite el caso al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes para que lo examine más detenidamente.

82. El Grupo de Trabajo recuerda que la privación de libertad se inscribe en la categoría I de la detención arbitraria si carece de fundamento jurídico. En relación con la detención de 2009, cabe la posibilidad de que no se presentara una orden si el Sr. Aguirre-Urbina fue detenido por cometer una infracción de tráfico. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2009 fue detenido por funcionarios de inmigración cuando se encontraba bajo custodia policial y no fue llevado ante un juez hasta el 18 de septiembre de 2009. Esto significa que el Sr. Aguirre-Urbina permaneció cuatro días recluido por su condición de inmigrante sin comparecer ante un juez.

83. El Sr. Aguirre-Urbina volvió a ser detenido en 2012 y pasó ocho meses en la cárcel tras firmar un acuerdo por el que admitía su culpabilidad. La fuente ha afirmado que la medida fue arbitraria porque el Sr. Aguirre-Urbina suscribió el acuerdo sin entenderlo plenamente; ahora bien, el Grupo de Trabajo se abstiene sistemáticamente de sustituir a las autoridades judiciales nacionales o de actuar como una suerte de tribunal supranacional cuando se le pide que examine la aplicación de la legislación nacional por el poder judicial⁶, ya que esto queda fuera de su ámbito de competencia.

84. Sin embargo, el Sr. Aguirre-Urbina volvió a ser detenido en razón de su situación migratoria en septiembre de 2012 y, en esa ocasión, tras haber sido trasladado a un centro de internamiento de inmigrantes, no compareció ante un juez para solicitar la libertad bajo fianza hasta un año después, el 12 de septiembre de 2013.

85. El Grupo de Trabajo desea recordar que el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo, que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática⁷. Ese derecho, que es una norma imperativa de derecho internacional, se aplica a todas las formas de privación de libertad⁸, incluidas no solo la detención a efectos de un proceso penal, sino también las situaciones de detención bajo el orden jurisdiccional administrativo y de otro tipo, como la detención de migrantes o la detención con fines de extradición. Además, también se aplica independientemente del lugar de detención o la terminología jurídica utilizada en la legislación. Toda forma de

⁵ Opinión núm. 72/2017.

⁶ Comité de Derechos Humanos, *Peraldi c. Francia*, comunicación núm. 40/2005; véanse también las opiniones núm. 15/2017, núm. 16/2017, núm. 30/2017, núm. 49/2019, núm. 58/2019 y 60/2019.

⁷ A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3.

⁸ *Ibid.*, párr. 11.

privación de libertad por cualquier motivo debe estar sujeta a la supervisión y el control efectivos del poder judicial⁹.

86. El Sr. Aguirre-Urbina fue recluso en dos ocasiones por su condición de inmigrante, y el Gobierno no explicó por qué se demoró en llevarlo ante una autoridad judicial en ninguno de los dos casos. La supervisión judicial de la privación de libertad constituye una garantía fundamental de la libertad personal¹⁰ y resulta esencial para asegurar que la privación de libertad tenga fundamento jurídico.

87. Por último, el Grupo de Trabajo toma nota de la alegación de que la reclusión, que fue una medida adoptada en el contexto de la migración y no en el sistema de justicia penal, revistió en realidad carácter punitivo. Como ha señalado el Grupo de Trabajo, esto nunca debería ocurrir¹¹. El Sr. Aguirre-Urbina permaneció recluso durante unos siete años, sin ser acusado formalmente ni juzgado, en lo que claramente constituyó una reclusión punitiva y, por ello, entrañó una vulneración del artículo 9 del Pacto.

88. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que, tanto en septiembre de 2009 como en septiembre de 2012, al recluir al Sr. Aguirre-Urbina se vulneraron los derechos que lo asisten en virtud del artículo 9 del Pacto. Así pues, las reclusiones no tuvieron fundamento jurídico, por lo que se inscriben en la categoría I de la detención arbitraria.

ii. Categoría II

89. La fuente alega que la privación de libertad del Sr. Aguirre-Urbina se inscribe en la categoría II de la detención arbitraria porque obedeció al ejercicio del derecho a solicitar asilo, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y porque entrañó una vulneración del derecho a no ser objeto de discriminación, enunciado en el artículo 26 del Pacto.

90. La fuente afirma que el Sr. Aguirre-Urbina llegó a los Estados Unidos cuando tenía 3 años y ha vivido allí desde entonces, sin resolver su situación de residencia. Fue detenido por primera vez el 12 de septiembre de 2009, por una infracción de tráfico, y, unos días más tarde, el 14 de septiembre de 2009, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo “encontró” en las dependencias policiales y lo trasladó a un centro de internamiento de inmigrantes, donde permaneció hasta obtener la libertad bajo fianza el 18 de septiembre de 2009. Esto sucedió casi 20 años después de su llegada a los Estados Unidos.

91. El Sr. Aguirre-Urbina fue detenido nuevamente por una infracción penal en enero de 2012. En mayo de 2012, suscribió un acuerdo por el que se declaraba culpable y, en septiembre de 2012, mientras cumplía una pena de prisión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas volvió a “encontrarlo” en las dependencias policiales y lo trasladó de nuevo a un centro de internamiento de inmigrantes, donde permaneció hasta el 11 de junio de 2019, cuando fue puesto en libertad bajo fianza. La fuente afirma que el Sr. Aguirre-Urbina fue recluso por su condición de inmigrante y por su solicitud de asilo. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha respondido a estas alegaciones.

92. El Grupo de Trabajo reitera que solicitar asilo no es un acto delictivo¹²; por el contrario, es un derecho humano universal, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Estos dos últimos instrumentos establecen una serie de obligaciones jurídicas internacionales que los Estados Unidos se han comprometido a respetar.

⁹ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, directriz 1 (A/HRC/30/37, anexo).

¹⁰ A/HRC/30/37, párr. 3.

¹¹ A/HRC/39/45, anexo, párrs. 9 y 14.

¹² Opiniones núm. 28/2017, núm. 42/2017, núm. 72/2017, núm. 1/2019, núm. 2/2019, núm. 7/2019 y núm. 74/2019.

93. El Grupo de Trabajo recuerda que, durante la visita que realizó al país en 2016, observó que en los Estados Unidos se recurría a la reclusión obligatoria de los inmigrantes e instó al Gobierno a que pusiera fin a esa práctica y ofreciera procedimientos administrativos alternativos que incluyesen evaluaciones individualizadas¹³.

94. El Comité de Derechos Humanos formuló una recomendación similar y observó que la reclusión obligatoria de los inmigrantes durante períodos prolongados sin tener en cuenta el caso individual podía plantear cuestiones en relación con el artículo 9 del Pacto¹⁴.

95. Aunque la reclusión durante los procedimientos de control de la inmigración no es *per se* arbitraria¹⁵, en el caso de la reclusión prolongada debe justificarse que es razonable, necesaria y proporcionada a la luz de las circunstancias, y debe revisarse a medida que se prolongue. No debe tener carácter punitivo y debe basarse en la evaluación de las circunstancias individuales de cada persona¹⁶.

96. El Sr. Aguirre-Urbina pasó siete largos años recluso en centros de internamiento de inmigrantes, compareciendo anualmente para solicitar la libertad bajo fianza ante el mismo juez, quien concluyó una y otra vez que existía riesgo de fuga y que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un peligro para la sociedad, sin aportar ninguna razón. El Gobierno tuvo la oportunidad de explicar los motivos que justificaban la reclusión y la necesidad y proporcionalidad de la medida, pero no lo hizo.

97. A falta de explicaciones del Gobierno sobre las razones particulares específicas que justificaban la necesidad de privar de libertad al Sr. Aguirre-Urbina, el Grupo de Trabajo concluye que este fue recluso en razón de su solicitud de asilo. El Sr. Aguirre-Urbina fue sometido a una medida general de reclusión obligatoria de los inmigrantes, por lo que se contravino el artículo 9 del Pacto y se vulneró el derecho a solicitar asilo, consagrado en el derecho internacional. El Sr. Aguirre-Urbina fue recluso por ejercer su derecho a solicitar asilo, de modo que su reclusión se inscribe en la categoría II de la detención arbitraria.

iii. Categoría III

98. La fuente afirma además que la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina se inscribe la categoría III de la detención arbitraria, ya que:

- a) El Sr. Aguirre-Urbina no pudo defenderse adecuadamente por falta del debido acceso a asistencia letrada;
- b) Se vulneró su derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial;
- c) No se le proporcionó una atención de la salud mental adecuada;
- d) Su condición de inmigrante se trató como un delito;
- e) Su reclusión revistió carácter punitivo.

99. El Grupo de Trabajo recuerda que no se ocupa de la reclusión penal del Sr. Aguirre-Urbina y que no todas las disposiciones del artículo 14 del Pacto son aplicables a los procedimientos no penales. Sin embargo, según ha observado el Comité de Derechos Humanos, en la medida en que el derecho interno faculta a un órgano judicial para decidir sobre las expulsiones o deportaciones, se aplican directamente la garantía de igualdad de todas las personas ante las cortes y los tribunales de justicia consagrada en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, así como los principios de imparcialidad, equidad e igualdad de medios procesales implícitos en esa garantía¹⁷.

¹³ A/HRC/36/37/Add.2, párr. 92.

¹⁴ CCPR/C/USA/CO/4, párr. 15.

¹⁵ Opiniones núm. 28/2017, núm. 42/2017 y núm. 72/2017; véase también la observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 18.

¹⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 18.

¹⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 62.

100. Además, el Grupo de Trabajo ha determinado que, en los casos de reclusión excesivamente prolongada, la persona privada de libertad deberá gozar de las mismas garantías que en las causas penales, incluidas las previstas en el artículo 14 del Pacto, aunque la reclusión se califique de administrativa¹⁸. El Sr. Aguirre-Urbina permaneció recluso durante unos siete años en condiciones similares a las que soportan quienes cumplen una condena penal, y esa reclusión fue de carácter punitivo (véase el párr. 87 *supra*). Por consiguiente, el Grupo de Trabajo procede a examinar si se cumplieron los requisitos del artículo 14 del Pacto y otras disposiciones pertinentes respecto de su privación de libertad. En este contexto, el Grupo de Trabajo reitera que el Gobierno no impugnó ninguna de las alegaciones formuladas por la fuente.

101. El Sr. Aguirre-Urbina tenía derecho a que su solicitud de libertad bajo fianza fuera examinada por un tribunal independiente e imparcial. Todas las vistas relativas a la libertad bajo fianza fueron presididas por el mismo juez que, a raíz de la recomendación formulada por el juez de distrito el 17 de mayo de 2019, fijó una fianza desproporcionadamente alta. El Grupo de Trabajo toma nota de las alegaciones, no refutadas por el Gobierno, de que ese juez se mostró clara y visiblemente importunado por tener que revisar su decisión anterior. Además, se trataba del mismo juez que no había velado por que el Sr. Aguirre-Urbina —quien, según los médicos, padecía graves problemas de salud mental— tuviera una representación letrada adecuada, por lo que no había garantizado la igualdad de medios procesales de manera imparcial. También era el mismo juez que no había fundamentado sus reiteradas conclusiones de que existía riesgo de fuga y de que el Sr. Aguirre-Urbina representaba un riesgo para la comunidad.

102. Tras habersele asignado la categoría de “peligroso” en el centro de internamiento de inmigrantes, el Sr. Aguirre-Urbina fue llevado ante el juez con un uniforme rojo, que debía vestir en todo momento. Esto constituyó otra vulneración del principio de igualdad de medios procesales.

103. Así pues, el Grupo de Trabajo considera que se han vulnerado los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Dado que esas vulneraciones se tradujeron en la prolongación de la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina, el Grupo de Trabajo considera que esta también se inscribe en la categoría III de la detención arbitraria.

iv. Categoría IV

104. El Sr. Aguirre-Urbina no estaba siendo juzgado en el contexto de una causa penal, sino que era objeto de un procedimiento de asilo y su reclusión guardaba relación con este. Ahora bien, la reclusión de inmigrantes también debe ajustarse a las normas internacionales básicas.

105. La reclusión en el marco de los procedimientos de inmigración debe ser una medida excepcional de último recurso y, para garantizar que así sea, debe estudiarse la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad¹⁹. En el presente caso, se estudió esa posibilidad, ya que se concedió la libertad bajo fianza al Sr. Aguirre-Urbina. Sin embargo, las alternativas a la privación de libertad han de ser además razonables y no deben depender de la capacidad de pago del interesado²⁰, en cuyo caso no constituirían verdaderas alternativas. En 2019, la fianza se fijó en 30.000 dólares, una suma que el Sr. Aguirre-Urbina indicó que no podía pagar. Aunque finalmente se recaudó la suma requerida mediante una iniciativa comunitaria, a falta de una explicación del Gobierno, el Grupo de Trabajo concluye, no obstante, que la fianza no era razonable. Ello entraña una grave vulneración del artículo 9 del Pacto, ya que contraviene el requisito de que la reclusión de inmigrantes sea una medida excepcional.

¹⁸ Opiniones núm. 31/2017, núm. 73/2018 y núm. 12/2020.

¹⁹ A/HRC/13/30, párr. 59; E/CN.4/1999/63/Add.3, párr. 33; A/HRC/19/57/Add.3, párr. 68 f); A/HRC/27/48/Add.2, párr. 124; y A/HRC/30/36/Add.1, párr. 81.

²⁰ A/HRC/36/37/Add.2, párrs. 28 y 30; y A/HRC/39/45, anexo.

106. El Grupo de Trabajo ya ha examinado las numerosas vistas sobre la libertad bajo fianza que se celebraron a lo largo de los siete años y ha observado que se cometieron diversas vulneraciones del derecho a un juicio imparcial. Además, en todos los casos fue el Sr. Aguirre-Urbina quien impugnó su reclusión. La medida no se sometió a un examen automático y periódico para garantizar que seguía estando justificada por ser necesaria y proporcional²¹. El Grupo de Trabajo recuerda que asegurar ese examen automático y periódico fue una de las recomendaciones que formuló a los Estados Unidos tras su visita al país en 2016²². La falta de ese examen constituyó otra grave vulneración del artículo 9 del Pacto.

107. La fuente alega que el Sr. Aguirre-Urbina, a quien se habían diagnosticado graves problemas de salud mental, tuvo importantes dificultades para acceder a asistencia letrada. El Grupo de Trabajo está consternado por las alegaciones, no refutadas por el Gobierno, de que el abogado del Sr. Aguirre-Urbina canceló al menos una vista sobre la libertad bajo fianza debido a la incapacidad de pago del Sr. Aguirre-Urbina.

108. Como señaló el Grupo de Trabajo, los migrantes y los solicitantes de asilo que sean privados de libertad tendrán derecho a que se les preste rápidamente una asistencia jurídica eficaz para poder impugnar la necesidad y la proporcionalidad de la reclusión²³. Así pues, las trabas para acceder a asistencia letrada también constituyeron vulneraciones graves del artículo 9 del Pacto, ya que mermaron seriamente las posibilidades del Sr. Aguirre-Urbina de impugnar la continuación de su reclusión.

109. El Sr. Aguirre-Urbina pasó en total unos siete años recluido en centros de internamiento de inmigrantes. Aunque pudo impugnar su privación de libertad, actuó siempre por iniciativa propia, y el Gobierno incumplió su obligación de garantizar un examen periódico y automático. Además, en las vistas relativas a la libertad bajo fianza se cometieron multitud de vulneraciones del derecho a un juicio imparcial y, cuando se fijó la fianza en 2019, la suma era tan elevada que, en las circunstancias individuales del Sr. Aguirre-Urbina, no constituía una verdadera alternativa a la privación de libertad.

110. El Grupo de Trabajo considera que las vías de recurso ofrecidas al Sr. Aguirre-Urbina no fueron efectivas, por lo que se vulneraron el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Por tanto, concluye que su detención administrativa como solicitante de asilo se inscribe en la categoría IV de la detención arbitraria.

v. Categoría V

111. La fuente afirma que la reclusión del Sr. Aguirre-Urbina también se inscribe en la categoría V de la detención arbitraria, por entrañar discriminación en razón de su situación económica, su pertenencia a una minoría, su condición de persona con discapacidad y su orientación sexual.

112. En cuanto a la alegación relativa a la orientación sexual, la fuente la presentó como uno de los motivos por los que no se debía expulsar al Sr. Aguirre-Urbina, y no como una razón por la que se le hubiera recluido. Sin embargo, por lo que se refiere a su estado de salud, durante los siete años en que el Sr. Aguirre-Urbina permaneció recluido se presentaron numerosos informes al tribunal en el contexto de varias vistas sobre la libertad bajo fianza. En ellos se indicaba claramente que el Sr. Aguirre-Urbina padecía graves problemas de salud mental y se recomendaba que recibiera tratamiento fuera de un

²¹ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 21 (A/HRC/30/37, anexo, párr. 43); A/HRC/13/30, párr. 61; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 11 3) (resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo); E/CN.4/2003/8/Add.2, párr. 64; A/HRC/13/30/Add.2, párr. 79 g); y A/HRC/16/47/Add.2, párr. 120. Véase también la opinión núm. 72/2017.

²² A/HRC/36/37/Add.2, párr. 92; véase también la opinión núm. 72/2017.

²³ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 21 (A/HRC/30/37, anexo, párrs. 42 y 43).

establecimiento de reclusión. También se cuestionaba su capacidad para comprender las actuaciones en curso y participar plenamente en ellas. Pese a ello, el Sr. Aguirre-Urbina permaneció recluso, lo que probablemente agravó su estado de salud, y tuvo que seguir enfrentándose a la dificultad de impugnar su reclusión sin representación legal efectiva en las sucesivas vistas. El Grupo de Trabajo está consternado por la actitud claramente discriminatoria de los tribunales hacia el Sr. Aguirre-Urbina y considera que su reclusión prolongada entrañó discriminación por motivos de discapacidad, por lo que se vulneró el artículo 26 del Pacto.

113. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha aclarado su interpretación de los artículos 2 y 26 del Pacto y que entiende que se permite hacer distinciones basadas en factores como la raza o la religión cuando dichas distinciones obedecen de manera razonable a un objetivo gubernamental legítimo²⁴. Sin embargo, el Gobierno no ha explicado la manera en que, en el presente caso, ha respetado el artículo 26 del Pacto o ha actuado con arreglo a su interpretación de esa disposición.

114. En cuanto a las alegaciones de discriminación por motivos de situación económica, el Grupo de Trabajo ha sido testigo de numerosos casos de reclusión de solicitantes de asilo en los Estados Unidos similares al que se está examinando²⁵. El Grupo de Trabajo reitera su preocupación ante la práctica aparentemente común de fijar fianzas tan altas que los inmigrantes reclusos no pueden pagarlas. No cabe considerar que con esa práctica se cumpla el requisito de estudiar alternativas a la privación de libertad, ya que las fianzas excesivas no constituyen una alternativa real.

115. Además, el Sr. Aguirre-Urbina tuvo que procurarse su propia representación letrada, y al menos una vista sobre la libertad bajo fianza fue cancelada por su abogado debido a la incapacidad de pago del Sr. Aguirre-Urbina. El Grupo de Trabajo concluye, pues, que al no garantizarse una representación letrada efectiva al Sr. Aguirre-Urbina y al fijarse una fianza excesiva se perpetuó la privación de libertad. Por consiguiente, la reclusión se inscribe en la categoría V de la detención arbitraria.

116. El Grupo de Trabajo desea expresar su preocupación por los presuntos problemas de salud del Sr. Aguirre-Urbina. Según las alegaciones de la fuente, no refutadas por el Gobierno, el Sr. Aguirre-Urbina padece graves problemas de salud mental, diagnosticados y confirmados durante numerosas actuaciones judiciales por distintos médicos. Es probable que su estado de salud se haya agravado a raíz de la privación arbitraria de libertad a la que fue sometido, aunque ya no se encuentre recluso. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que vele por que se respete y proteja debidamente el derecho a la salud que asiste al Sr. Aguirre-Urbina y por que este reciba gratuitamente todos los tratamientos y medicamentos adecuados. El Grupo de Trabajo remite el caso a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, al Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad y al Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

117. En el marco de su mandato, el Grupo de Trabajo debe examinar en qué medida las condiciones de reclusión, incluido el trato dispensado a las personas reclusas, pueden afectar negativamente a las posibilidades de preparar la defensa y tener un proceso judicial imparcial²⁶. El Grupo de Trabajo observó durante su visita al país en 2016 que las condiciones de la reclusión de inmigrantes en los Estados Unidos solían ser deficientes. El Gobierno debe velar por que la reclusión de inmigrantes no tenga carácter punitivo y por que todos los inmigrantes reclusos gocen de condiciones dignas y sean tratados con el debido respeto de la dignidad humana.

118. Además, la fuente ha formulado graves denuncias relativas al trabajo que pueden realizar las personas reclusas en los centros de internamiento de inmigrantes gestionados por The GEO Group y a las condiciones de trabajo de esas personas y la insuficiente

²⁴ Véanse las declaraciones y reservas al Pacto en <https://indicators.ohchr.org/>.

²⁵ A/HRC/36/37/Add.2, párrs. 21 a 46.

²⁶ E/CN.4/2004/3/Add.3, párr. 33; véanse también las opiniones núm. 1/2017 y núm. 30/2017.

remuneración que reciben. El Grupo de Trabajo remite el caso al Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

119. El Grupo de Trabajo observa que han transcurrido cuatro años desde que visitó los Estados Unidos en 2016, y ahora agradecería que se le invitara a realizar una visita de seguimiento, de conformidad con el mandato relativo a las visitas a los países.

Decisión

120. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Fernando Aguirre-Urbina es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III, IV y V.

121. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Estados Unidos de América que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Aguirre-Urbina sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

122. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Aguirre-Urbina en libertad sin condiciones y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que esta plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar la puesta en libertad sin condiciones del Sr. Aguirre-Urbina.

123. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias que concurren en la privación arbitraria de libertad del Sr. Aguirre-Urbina y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

124. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

125. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

126. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, y que, a este respecto, le indiquen en particular lo siguiente:

a) Si se ha puesto en libertad sin condiciones a Fernando Aguirre-Urbina y, de ser así, en qué fecha;

b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Aguirre-Urbina;

c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Aguirre-Urbina y, de ser así, cuál ha sido el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de los Estados Unidos de América con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

127. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

128. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

129. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁷.

[Aprobada el 26 de agosto de 2020]

²⁷ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.